



CONFLICTO DE COMPETENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

Medellín, dos (02) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Decide el Tribunal Superior de Medellín – Sala Primera de Decisión Laboral - el conflicto de competencia negativo suscitado entre el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado y el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS -PROTECCIÓN S.A.- contra ASESORES FINANCIEROS Y CONTROL CONTABLE SAS –FINCONTROL SAS-.

ANTECEDENTES:

Mediante auto del 14 de junio de 2022, el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado se declaró incompetente para continuar con el conocimiento del proceso y, en consecuencia, ordenó su remisión a los Juzgados de Pequeña Causas de Medellín –reparto-.

A su turno, a través de auto del 14 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas Laborales de Medellín se declaró igualmente incompetente y acto seguido propuso el conflicto negativo de competencia para que fuera resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.

CONSIDERACIONES:

Esta Sala de Decisión Laboral es competente para definir el conflicto de competencia suscitado entre los despachos judiciales mencionados,

de conformidad con el artículo 15 del C.P.L., modificado por el artículo 10 de la Ley 712 de 2001, que determina que las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial conocen, entre otros asuntos *“De los conflictos de competencia que se susciten entre dos juzgados del mismo distrito judicial”*.

Discuten la competencia para seguir conociendo de este proceso, el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado y el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín con ocasión de la demanda presentada por PROTECCIÓN S.A en contra de FINCONTROL SAS, en la que pretende a través de un proceso ejecutivo laboral, se libre mandamiento de pago por la suma de \$5.979.025 por concepto de capital de la obligación a cargo del empleador por los aportes en pensión obligatoria y \$1.327.400 por intereses moratorios.

El primer despacho judicial mencionado sostiene que en razón al domicilio principal de la sociedad ejecutante - PROTECCIÓN S.A. - y en el que se entiende se creó el título ejecutivo base de recaudo y se realizó el requerimiento previo al deudor, será el Juez de ese Circuito Judicial –Medellín- el encargado de conocer el proceso, citando para ello las decisiones de la Corte Suprema de Justicia – CSJ AL228-2021 y CSJ AL2940 -2019 reiterada en autos CSJ AL4167-2019 y CSJ AL1046-2020, remitiendo el proceso a los Jueces de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, advirtiéndole asimismo la cuantía de las pretensiones.

El segundo, fundamenta su incompetencia en el hecho de que el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado libró mandamiento ejecutivo y ordenó la notificación de la parte ejecutada, razón por la cual, en los términos del artículo 16 del Código General del Proceso -CGP- fue prorrogada la competencia para conocer del proceso, correspondiéndole continuar con el mismo al Juzgado Laboral del Circuito Envigado.

Bien. Cuando se pretende el pago de cotizaciones en mora al Sistema de Seguridad Social, la competencia radica, *i)* en el juez del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social **o**, *ii)* el de aquel donde se adelantaron las gestiones de cobro, conforme a lo establecido en el artículo 110 del CPLSS. En este sentido se ha pronunciado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el auto AL2940 del 10 de julio de 2019, posición reiterada en providencias como: AL229-2021 radicación N° 88999 del 3/02/2021; AL228-2021 radicación N° 88617 del 3/02/2021; AL5207-2021 radicación N°90582 del 27/10/2021; AL5734-2021 radicación N° 91539 del 27/10/2021; AL6061-2021 radicación N° 91436 del 24/11/2021; AL6065-2021 radicación N° 91738 del 24/11/2021 y AL214-2022 radicación N° 92282 del 19/01/2022.

En la última de las providencias relacionadas, indicó dicha Corporación lo siguiente:

“Cumple citar lo razonado en providencia CSJ AL2940-2019 en un asunto de similares condiciones a las del presente, reiterada en proveídos CSJ AL4167-2019, CSJ AL1046-2020, CSJ AL228-2021, CSJ AL398-2021 y CSJ AL722-2021, donde esta Sala señaló:

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, dimana pertinente revisar el acápite de cuantía y competencia del libelo introductorio, en el que se afirma con relación al factor territorial, el cual es precisamente el discutido por los juzgados en colisión, que la competencia radica en el lugar del cumplimiento de la obligación, acorde a lo establecido en el numeral 3 del artículo 28 del Código General del Proceso, cuyo tenor literal señala: «[...] En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita».

En ese entendido, la entidad demandante asegura que el proceso debe tramitarse en la ciudad de Bogotá, no obstante, no aporta documento alguno que acredite que ese sea el

lugar del cumplimiento de la obligación, por lo que entonces esa normativa resulta inaplicable.

Ahora bien, al ceñirse al artículo 5° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los procesos en los que la competencia recaiga en varios jueces, bien sea por el domicilio de la demandada o por el último lugar en donde se haya prestado el servicio, la parte demandante, a efectos de fijar la competencia, tiene la posibilidad de escoger libre y con plenos efectos, cualquiera de los anteriores, siendo esto una garantía que la jurisprudencia y doctrina han denominado como *fuero electivo*. Sin embargo, dicha norma tampoco se ajusta al caso concreto ante la inexistencia de un lugar de prestación de servicios, visto desde la óptica de los que realiza un trabajador, lo que excluye la aplicabilidad del mencionado fuero, puesto que no habría otra opción de elección que el lugar del domicilio de la demandada, el cual de acuerdo al certificado de existencia y representación legal se encuentra en Fundación – Magdalena (f.º 25).

En el caso bajo examen, si bien no existe una norma en materia procesal del trabajo que consagre de manera clara y precisa la competencia para conocer del trámite de la acción ejecutiva del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, encaminada en esta oportunidad al cobro de cotizaciones al Subsistema de Seguridad Social en Salud, lo cierto es que por aplicación analógica conforme lo permite el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la regla que se adapta es la establecida en su artículo 110, puesto que determina la competencia del juez del trabajo en asuntos de igual naturaleza, es decir, en los que se busca garantizar los derechos a la seguridad social de los afiliados a través del cobro ejecutivo a los empleadores de aquellas cotizaciones que no fueron satisfechas oportunamente.

La citada norma señala:

Juez competente en las ejecuciones promovidas por el Instituto de Seguros Sociales. De las ejecuciones de que trata el artículo anterior y el 32 de la Ley 90 de 1946 conocerán los jueces del trabajo del domicilio del Instituto Colombiano de Seguros Sociales o de la caja seccional del mismo, que hubiese proferido la resolución correspondiente y de acuerdo con las reglas generales sobre competencia por razón de la cuantía.

Debe precisarse entonces, que el transcrito precepto adjetivo legal, además, es el aplicable al caso, porque para la época de expedición del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (año 1948), la única entidad administradora del Sistema de Seguridad Social lo era el Instituto de Seguros Sociales, mientras que, con la Ley 100 de 1993, se originó la creación de diferentes administradoras de los subsistemas que lo integran, sin que se determinara tampoco, como se anunció precedentemente, en quién recaía la competencia para conocer de la ejecución por cotizaciones a la seguridad social insolutas, situación que como se dijo, sí estaba prevista en su momento para el ISS, y que en tal virtud, resulta ser la más cercana para dilucidar el presente conflicto.

Ahora, como el procedimiento de cobro de las cotizaciones en mora previo a la acción ejecutiva, se efectuó en los términos de los artículos 24 de la Ley 100 de 1993 y 2º y 5º del Decreto Reglamentario 2633 de 1994, en Pereira-Risaralda, como se desprende de los documentos vistos a folios 54 a 56 - PDF del expediente digital del Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira-, y conforme lo asentado, es claro que, cuando se pretenda el pago de cotizaciones en mora al sistema de seguridad social, la competencia radica en el juez del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social o el de aquel donde se adelantaron las gestiones de cobro, como quiera que en la ciudad de Pereira, la entidad ejecutante cuenta con su domicilio, y desde el cual además se adelantó la gestión de cobro prejudicial, y en el que se deduce se originó el título base de recaudo ejecutivo.

De ahí que conforme al criterio de esta Corporación al que se hizo alusión en precedencia, el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, sea el competente para conocer del presente asunto (...).

Postura reiterada en providencia AL3363 del 27 de julio de 2022, entre otras, donde se indicó:

“En el anterior orden de ideas, y, teniendo en cuenta que el título ejecutivo expresa inequívocamente haber sido expedido en la ciudad de Bogotá el 8 de marzo de 2022 (fl.15), localidad

que a su vez, confluye con la de radicación de la demanda, para la Sala, resulta permisible establecer, dicha ciudad como la determinada por la entidad accionante, en ejercicio de su fuero electivo, a efectos de tramitar la presente controversia.”

En el presente caso se advierte claramente que las gestiones de cobro prejurídico se adelantaron desde el municipio de Medellín, según se observa de la prueba documental aportada con la demanda, donde se deduce que el “*Titulo Ejecutivo No. 11495-21*” base de recaudo, fue constituido allí, “*Medellín, Febrero 15 de 2021*”:

16

Medellin, Febrero 15 de 2021

Señor (a)
NIT 900470552
ASESORES FINANCIEROS Y CONTROL
CONTABLE S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CC 0
REPRESENTANTE LEGAL
TRANSV 34 DD SUR 30 A 25
ENVIGADO - ANTIOQUIA

Referencia: Requerimiento por Mora de Aportes
Pensión Obligatoria - Previo a la demanda.

Cordial saludo,

Dando continuidad con nuestro proceso de cobro su empresa aún registra una deuda por no pago de aportes, pago extemporáneo y/o menor valor pagado, de sus trabajadores afiliados al Fondo de Pensiones Obligatorias Protección con corte al periodo de cotización 12/2020, por los afiliados y periodos relacionadas en los estados de deuda anexo al presente requerimiento.

De acuerdo con los artículos 17 y 22 de la Ley 100 de 1993 el empleador, tiene la obligación de cotizar y pagar la totalidad del aporte a Protección por los trabajadores afiliados a este Fondo de Pensiones. PROTECCIÓN S.A. consiente de la responsabilidad que le asiste en el cobro de los aportes de sus afiliados y en uso de las facultades que le otorga la ley, elaborará la liquidación que presta mérito ejecutivo contra la empresa, si en el término de 15 días hábiles contados a partir del recibo de esta comunicación no se ha pronunciado sobre la deuda reportada, y se adelantará la acción judicial de cobro. Artículo 5º del Decreto 2833 de 1994.

Es posible que hayan dejado de informar novedades de salario, traslados, retiro de afiliados, pagos a otros fondos o al ISS liquidado, que puedan afectar la deuda que se reporta, por lo que solicitamos sean informadas dentro del término de este requerimiento.

El no pago oportuno de los aportes genera intereses de mora a cargo del empleador igual a los que rigen para impuestos de renta y complementarios, por remisión del artículo 23 de la Ley 100 de 1993.

Reiteramos la necesidad de que su empresa se ponga al día con los aportes de pensiones y evitar pagar gastos adicionales por el cobro judicial como honorarios del abogado de Protección, los gastos y costas del proceso. Y evítense los riesgos por asumir una eventual pensión, sanciones moratorias, responsabilidad penal por la retención y no pago de aportes, extensión de la responsabilidad a los socios para el tipo de sociedades de responsabilidad limitada o Empresa Unipersonal y el eventual conocimiento de esta situación a las autoridades del trabajo y de vigilancia.

Puede comunicarse a nuestra Línea de Servicio gratuita Nacional 01 8000 52 8000 - Bogotá 744 44 64 - Medellín y Cali: 5109099 Barranquilla: 3197999 - Cartagena: 6424999: donde podrá acceder por la opción 2, ingresar su identificación, posteriormente seleccionar la opción 0 para contactar con uno de nuestros representantes, o escribiéndonos al correo proteccionenlinea@proteccion.com.co o ingresando a www.proteccion.com, opción Empresas, autenticada con tu usuario y clave, has clic en Gestión de deudas e inconsistencias de Pensión Obligatoria, diligencia la información.


Cordialmente,

Representante Legal Judicial
PROTECCIÓN S.A.

1 Requerimiento previo a demanda UGPP resolución 444 de 2013

Protección

Así mismo, la AFP ejecutante tiene domicilio en la ciudad de Medellín - sin que se advierta sede en el Municipio de Envigado, de ahí que, el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, sea quien deba conocer del presente asunto.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia		25
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS		
Fecha de expedición: 05/02/2021 - 11:38:42 AM		 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
Recibo No.: 0020652321	Valor: \$00	
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: UarpjofcXHdEnjal		
<p>-----</p> <p>Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.</p> <p>-----</p>		
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:		
IDENTIFICACIÓN		
Razón social:	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S.A.	
Sigla:	PROTECCION	
Nit:	800138188-1	
Domicilio principal:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA	

No sobra añadir que la fijación de la competencia en este asunto, dice relación al factor subjetivo, esto es, en razón de la calidad especial de uno de los sujetos procesales como lo es la parte ejecutante, lo que significa que, en los términos del artículo 110 del CPTSS, de los conflictos en que sea parte una entidad del sistema de seguridad social conocerá el juez laboral del domicilio donde se hubiere proferido la resolución correspondiente. Unido a lo dicho, entonces, no tiene aplicación el artículo 16 del CGP, en cuanto señala que *“La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables”*, sin perjuicio de que lo actuado conserve validez.

Conforme a lo antes expuesto, se declarará que la competencia dentro del presente proceso ejecutivo laboral corresponde al Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín a quien

fue remitido el proceso, y por tanto será allí a donde se devolverán las diligencias para que se continúe con el trámite que corresponda.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de Ley,

R E S U E L V E:

DIRIMIR el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Juzgado Laboral del Circuito de Envigado y el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral de LA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS –PROTECCIÓN S.A.- contra ASESORES FINANCIEROS Y CONTROL CONTABLE SAS –FINCONTROL SAS-, en el sentido de asignarle la competencia al **Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín**, a donde se remitirá el expediente.

Notifíquese esta decisión al Juzgado Laboral del Circuito de Envigado. Acta N° 016.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS

<p>EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR</p> <p>Que la presente providencia se notificó por estados N°17 del 03 de febrero de 2023.</p> <p>Consultable aquí: https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147</p>



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

EJECUTIVO LABORAL

DEMANDANTE: PROTECCIÓN S.A.

DEMANDADO: ASESORES FINANCIEROS Y CONTROL CONTABLE SAS –
FINCONTROL SAS-. PROTECCIÓN S.A.

RADICADO: 05001 41 05 002 2020 00369 01

Medellín, dos (02) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

FRANCISCO ARANGO TORRES, magistrado de la SALA PRIMERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, presento **SALVAMENTO DE VOTO** en la decisión de la Sala mayoritaria.

Con el debido respeto, me aparto de la decisión de la Sala mayoritaria, de DIRIMIR el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Juzgado Laboral del Circuito de Envigado y el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral de la referencia, en el sentido de asignarle la competencia al **Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín**.

RAZONES DEL DICENSO

A pesar que todas las razones que se indican en la decisión mayoritaria para concluir que la competencia para conocer del proceso ejecutivo, lo es del Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, confirme los precedentes de la Sala de Casación Laboral de la C.S.J., se encuentran ajustadas al precedente de esta Corte, la decisión no se refiere a los argumento del juez antes mencionado para sostener que el proceso lo debió

seguir conociendo el Juzgado Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, que no son otras que este juzgado ya había librado mandamiento ejecutivo y notificado a la parte ejecutada, razón por la cual, en los términos del artículo 16 del Código General del Proceso -CGP- fue prorrogada la competencia para conocer del proceso, correspondiéndole continuar con el mismo al Juzgado Laboral del Circuito Envigado.

Considero que en este caso, la asistía razón al Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, pues si el Juzgado Laboral del Circuito Envigado admitió la demanda ejecutiva librando el mandamiento de pago y habiéndose notificado a la parte ejecutada, no fue objeto de reproche alguna por la demandada lo referente a la competencia, pues no propuso excepciones previas referidas a la falta de competencia en razón del factor territorial, lo que pudo haberlo efectuado a la luz de lo dispuesto en el Nral. 7 del Art. 100 del CGP, siendo relevante que este código no estableció en su Art. 133 como causal de nulidad del proceso, que se le esté tramitando la demanda por un juez distinto al que correspondería por el factor territorial, siendo relevante y que en esta norma en su párrafo único establece que: *“Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.”*, por lo que al haber un medio legal para impugnar la competencia en razón del factor territorial, como lo es proponer la excepción previa de falta de competencia, si no se hizo uso de este medio de impugnación, indistintamente que fuera competente o no el Juzgado Laboral del Circuito Envigado, para conocer del procesos por el factor territorial, si este aspecto no fue objeto de excepción previa, pues si el juez aceptó su competencia al librar la orden de pago, debía seguir conociendo del proceso hasta su culminación, en virtud del principio de la *«perpetuatio jurisdictionis»*, cuando la falta de competencia no se trate del factor funcional o subjetivo, pues el Inc. 2 del Art. 16 del CGP establece:

“Artículo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son

improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo.

La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del

proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente.”

La competencia ha sido concebida como la porción, cantidad, medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos ciertos factores como materia, los sujetos intervinientes, cuantía, territorio, etc., a los cuales hace alusión la Corte Constitucional en Sentencia C-655 de 1997, de la siguiente manera:

- a. La naturaleza o materia del proceso (factor objetivo)
- b. La cuantía de las pretensiones (factor objetivo - cuantía)
- c. La calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo)
- d. La naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor funcional),
- e. El lugar donde debe tramitarse el proceso (factor objetivo- territorial),
- f. El factor de conexidad

Así entonces el factor de competencia territorial, no corresponde al factor subjetivo o funcional, por lo que la competencia en este caso del Juzgado Laboral del Circuito Envigado, se prorrogaba.

Sobre el anterior asunto se pronunció la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en auto AL755-2014, Radicación N° 62743 de febrero 19 de 2014. Magistrado Ponente Dr. LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS en los siguientes términos:

“...la fijación de la competencia en un determinado despacho judicial se produce cuando se admite la demanda introductoria del proceso o, en otros casos, como los de los procesos ejecutivos, se libra la orden de pago correspondiente, momento a partir del cual no puede ser modificada por los cambios de hecho o de derecho que ocurran con posterioridad a su admisión, vinculados con la pretensión, situación procesal que se explica por la doctrina en lo que se ha dado en llamar principio de la «perpetuatio jurisdictionis», es decir, de la permanencia de la competencia de un juez para todo el proceso «semel iudex semper iudex» (una vez juez, siempre juez), pero que, en cuanto toca con el factor territorial, queda supeditada al derecho del demandado de objetarla o aceptarla expresa o tácitamente, de modo que, no variará o se alterará una vez dilucidado el cuestionamiento que a la misma se haga por éste, salvo causa legal (artículo 21 C.P.C., y 27 del N.C.G.P.)”

En conclusión, al haber considerado el Juzgado Laboral del Circuito Envigado, que tenía competencia para conocer del proceso, y no haberse opuesto las partes por los medios legales a su disposición y al no ser el factor de competencia

territorial asunto que constituya causal de nulidad, ni factor subjetivo o funcional de la competencia, el Juzgado Laboral del Circuito Envigado era el llamado a seguir conociendo de este proceso y por lo tanto se debió resolver el conflicto asignando la competencia a este Juez.

En los anteriores términos dejo salvado mi voto.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia
Firma Con Salvamento De Voto

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **dc58c6675ce96454da6d0d658aa20dcf6eb1d8d38ce6e410a0694bab0b3c60e1**

Documento generado en 02/02/2023 03:27:51 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>